

Recurso nº 350/2020

Acuerdo de 17 de diciembre de 2020, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, sobre la adopción de medidas provisionales, en relación con el expediente de contratación “Suministro en régimen de arrendamiento sin opción a compra de 451 equipos multifunción y sus fungibles para sede judiciales de la Comunidad de Madrid”, Expediente A/SUM-002844/2020, licitado por la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid.

Con fecha 9 de diciembre de 2020, tuvo entrada en el registro de este Tribunal el recurso especial en materia de contratación, formulado por la representación de CANON ESPAÑA S.A.U. contra el acuerdo de la mesa de contratación de 16 de noviembre de 2020 por la que se considera que, el recurrente propuesto como adjudicatario ha retirado su oferta.

La recurrente, en el escrito de interposición del recurso solicita que se acuerde la medida cautelar de suspensión del procedimiento de contratación hasta la resolución del presente recurso, fundamentándolo en que la suspensión del procedimiento es el único medio posible para asegurar que la eficacia de la resolución que recaiga en este recurso especial no se vea frustrada con antelación. Si no se adopta la medida cautelar interesada, se ocasionarán perjuicios de imposible reparación, señalando *“En el caso de no procederse a la suspensión del procedimiento, se adjudicará el contrato al siguiente licitador, que iniciará su ejecución, lo que podría impedir que CANON resultara adjudicataria del contrato incluso en caso de estimarse el presente recurso si, en dicho momento, se entendiera que el contrato está sustancialmente ejecutado, lo que determinaría que la efectividad de la Resolución dictada en el mismo fuera ficticia, determinando la pérdida de la finalidad legítima del presente recurso causando perjuicios irreparables para CANON”*.



El órgano de contratación, en su informe remitido junto al expediente de contratación el día 15 de diciembre de 2020, manifiesta *“El procedimiento se encuentra actualmente en fase de celebración de la mesa para la calificación de la documentación presentada por el propuesto adjudicatario conforme a lo recogido en el acta impugnada. Mesa que se convocó para el 10 de diciembre de 2020 y que se decidió suspender al tener conocimiento de la interposición del presente recurso especial.*

Por ello que se considera que se debe acceder a la petición de la recurrente de suspender el procedimiento de adjudicación, hasta que recaiga resolución sobre este recurso, ya que la estimación del mismo por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública conllevaría un cambio sustancial en la propuesta de adjudicación”.

El artículo 51.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), establece que, en el escrito de interposición, se hará constar el acto recurrido, el motivo que fundamenta el recurso, los medios de prueba de que pretende valerse el recurrente y en su caso las medidas de naturaleza cautelar cuya adopción solicite.

La suspensión automática del expediente de contratación en fase de adjudicación, tiene por objeto evitar que con la formalización del contrato se puedan consolidar situaciones de ilegalidad e impedir que se causen otros perjuicios a los interesados afectados, tal y como aparece configurada ya en el artículo 2.3 de la Directiva 89/665/CE (redacción actual dada por la Directiva 2007/66/CE), que dispone la suspensión del procedimiento como garantía de que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato cuando el recurso se plantee contra la decisión de adjudicación de un contrato *“Cuando se someta a un órgano de primera instancia independiente del poder adjudicador un recurso referente a una decisión de adjudicación de un contrato, los Estados miembros garantizarán que el poder*



adjudicador no pueda celebrar el contrato hasta que el órgano que examine el recurso haya tomado una decisión sobre la solicitud de medidas provisionales o sobre el fondo del recurso”.

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la adopción de la medida cautelar exige que el recurso pueda perder su finalidad legítima, lo que significa que, de ejecutarse el acto, se crearían situaciones jurídicas irreversibles haciendo ineficaz la sentencia (en este caso resolución) que se dicte, e imposibilitando el cumplimiento de la misma en sus propios términos, con merma del principio de identidad. Aun concurriendo el anterior presupuesto, puede denegarse la medida cautelar siempre que se aprecie perturbación grave de los intereses generales o de tercero, lo que obliga a efectuar siempre a un juicio comparativo de todos los intereses en juego, concediendo especial relevancia, a la hora de decidir, a la mayor perturbación que la medida cause al interés general o al de un tercero afectado por la eficacia del acto impugnado; y, en todo caso, el juicio de ponderación que al efecto ha de realizar el órgano jurisdiccional debe atender a las circunstancias particulares de cada situación, y exige motivación acorde con el proceso lógico efectuado para justificar la adopción o no de la medida cautelar solicitada.

El recurso especial en materia de contratación tiene como finalidad obtener una resolución rápida y eficaz, de manera que una decisión ilegal no se pueda consolidar, y con la suspensión de la tramitación del expediente de contratación en este supuesto se trata de evitar la posibilidad de causar perjuicios a los interesados afectados y, que, en su caso, se facilite la retroacción de las actuaciones al momento en que se cometió la posible infracción.

De acuerdo con lo anterior, ponderadas las circunstancias del caso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 de la LCSP, este Tribunal por unanimidad:



ACUERDA

Suspender la tramitación del procedimiento de adjudicación del contrato de “Suministro en régimen de arrendamiento sin opción a compra de 451 equipos multifunción y sus fungibles para sede judiciales de la Comunidad de Madrid”, Expediente A/SUM-002844/2020, licitado por la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, hasta que se resuelva el recurso y se acuerde expresamente el levantamiento de la suspensión.

Contra el presente Acuerdo no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de los que procedan contra la resolución que se dicte en el procedimiento principal.

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 0982662976912076792794